

El pluralismo

Rafael GAMBRA

Vivimos hoy, en los años noventa, bajo el signo del pluralismo. Formamos parte —dícese—

de una sociedad pluralista; nuestra Constitución es pluralista; hasta en la Iglesia se escuchan voces a favor de «un sano pluralismo» y de una Iglesia pluralista.

Quizá nadie sepa, a ciencia cierta, lo que el término y el calificativo significan y suponen, pero son voces que hoy «suenan bien». Como en las décadas cuarenta y cincuenta «sonaba bien» el término *unidad*: el Estado unitario, la España una, la unidad de destino... ¿Llegó alguien a acidar con claridad lo que significaba aquello de «la unidad entre las tierras y los hombres de España»? Si se medita como designio, poco puede imaginarse más sombrío e inquietante. ¿Un monocultivo universal? ¿Una generación *in vitro* informe? Sin embargo, vivido como ideal de la época, movió muchas voluntades y entusiasmos.

¿Qué significa hoy —qué oculta en su aparente inocuidad— el calificativo *pluralista*, la constan-

te apelación al *pluralismo* como a una virtud o un ideal?

No significa, ciertamente, la observación —por lo demás obvia— de que los hombres y los pueblos son todos diferentes. Que la individualidad de los humanos y la variedad de sus agrupaciones históricas es un dato de la realidad tan básico como lo es, por otro lado, la unidad e inmutabilidad de los conceptos o de las leyes científicas. Más bien al contrario, los actuales partidarios del «pluralismo», que son también y siempre liberales y racionalistas, ven con muy poca simpatía esa variedad de lo que existe cuando de leyes o de ordenaciones políticas se trata. La frase que más ha irritado a liberales «pluralistas» en los últimos tiempos ha sido aquella que inventó Fraga para publicidad turística: «España es diferente». Era para ellos como el reconocimiento de una laca, de un estigma colectivo. La variedad y diferenciación en usos, leyes, costumbres, incluso en la edificación, el arraigo en un modo de vivir, les molestó desde que nacieron a la historia.

De aquí que, hacia el exterior, estos *pluralistas* fueron siempre

«homologadores», europeizados, aspirantes al «nivel europeo», niveladores de su patria. Y hacia el interior, siempre uniformistas, centralizadores, estatistas. Baste recordar el Código Civil contra los derechos forales, la Universidad napoleónica contra las universidades corporativas, la división provincial contra los países históricos. Su ideal fue siempre igualitario por supuestamente racional: enseñanza única y obligatoria para todos los ciudadanos, seguridad social igualmente única y obligatoria, una edificación protegida, social y masificada...

Incluso cuando, por motivos (para ellos) más o menos inconfesables, se han puesto a admitir diferencias territoriales, las han visto con sus mismas lentes unitarias y uniformistas. Las actuales «autonomías» son su fruto. En vez de variedades forales o derechos históricos, sólo han sabido ver «provincias más grandes», con igual «techo autonómico», sometidas a una misma ley de autonomías y a una misma Constitución de nueva planta. No sólo ignoran las verdaderas autonomías forales —como en el caso de Navarra y de las propias pro-

vincias vascongadas— sino que las combaten como antaño y procuran someterlas a «entes autonómicos» nuevos, nacidos de los partidos políticos, centralistas también en su propio ámbito.

Lo cual no es obstáculo —antes al contrario— para que tales manejos resulten disgregadores y disolutorios de la verdadera unidad nacional. Es un hecho que se cumple tanto en el mundo moral y político como en el físico. Si previamente he hecho rígida y uniforme a una sustancia antes flexible, y pretendo ahora doblarle en configuraciones nuevas, resultará normal que se casque y rompa en mil pedazos. Lo único que, por principio, no puede hacer el racionalismo uniformista —liberal o socialista— es crear autonomías: eso lo podrán hacer otras personas, otros movimientos, con sentido histórico y jurídico, y también con prudencia política.

Lo mismo, pero en grado eminente, podría decirse de las frecuentes apelaciones al *pluralismo* por parte de la Iglesia progresista o de los eclesiásticos agiornados. No se trata en absoluto de reivindicar la variedad inmensa de ritos, de costumbres,

de jurisdicciones, de bulas, de la Iglesia de siempre, tan sólida en su unidad como rica en su diversidad. Ni de preservar, por ejemplo, el espíritu del franciscanismo, tan diferente del dominicano o del agustiniano o del jesuítico, dentro todos de una misma Iglesia. No, todo esto es indiferente o estorba a cierta mentalidad que dominó en el Concilio. La nueva Iglesia, aún imponiendo las lenguas llamadas vernáculas, ha uniformado todo hasta la extrema monotonía. El mismo «Día del amor fraterno» con iguales carteles filantrópicos se celebra en Australia y en Venezuela; la misma «Eucaristía» con idénticas preces sociales e igual predicación liberal o socialista puede oírse en Canadá o en Sudáfrica. La riqueza multisecular del culto católico se sustituye por la monotonía más absoluta.

¿Qué es, pues, el *pluralismo*? Si no se trata de reivindicar la diversidad de formas y modos de vida ni de derechos que preexistieron al Estado moderno, ¿qué significa ese término *pluralismo*?

Simplemente, la negación de la unidad última —unidad religiosa— en que se asienta en su origen y de hecho toda civiliza-